



*******(1)**.

VS.

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN MATERIA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

EXPEDIENTE 172/2021 S.E.

Mexicali, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.

SENTENCIA DEFINITIVA que declara la nulidad de la resolución impugnada con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, por vicios de procedimiento al haberse omitido las formalidades que la normatividad establece para la formación de la voluntad de la autoridad demandada en sesión como órgano colegiado para iniciar y resolver el procedimiento de separación definitiva instaurado en contra del actor.

GLOSARIO: Se invocan autoridades y normas conforme a las siguientes denominaciones:

Ley del Tribunal	Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
Tribunal	Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
Ley de Seguridad Pública	Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California publicada el veintiuno de agosto de dos mil nueve en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y aplicable conforme al artículo transitorio tercero del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y de Seguridad Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California.
Reglamento del Servicio Profesional	Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, antes denominado Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para el Municipio de Tijuana, Baja California, publicado el seis de diciembre de dos



	mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y aplicable al caso conforme al artículo transitorio tercero del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y de Seguridad Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California.
Comisión del Servicio Profesional	Comisión del Servicio Profesional de Carrera en materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California.
Código Civil Adjetivo	Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.
Secretaría de Seguridad	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California.
Sala Especializada	Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción.

Enseguida se procede a emitir sentencia en el juicio,
y

R E S U L T A N D O:

I.- Que el cinco de octubre de dos mil veintiuno la parte actora interpuso ante esta Sala Especializada demanda de nulidad contra la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno emitida por la Comisión del Servicio Profesional en el procedimiento de separación definitiva *****⁽²⁾, mediante la cual se determinó su separación definitiva como miembro policial adscrito a la Secretaría de Seguridad.

II.- Que mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno se admitió la demanda, teniéndose como autoridad demandada a la Comisión del Servicio Profesional, quien al contestar la demanda hizo valer causales de improcedencia y sostuvo la validez del acto impugnado.

IV.- Que el nueve de mayo de dos mil veintidós se citó a las partes para oír sentencia de primera instancia, quedando cerrada la instrucción del presente juicio, por lo que se está en condiciones de resolver la controversia planteada en el juicio; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente juicio con



fundamento en el artículo 55, Apartado A, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y artículos 1, 4, fracción III, 6, 25, 27, fracción II, inciso b, de la Ley del Tribunal, tomando en consideración que la resolución impugnada emana de una autoridad municipal y es de las que se dictan en materia administrativa que determinan la separación de un miembro de una institución policial, en términos de la legislación aplicable.

SEGUNDO. Existencia de la resolución impugnada. La existencia de la resolución impugnada quedó debidamente acreditada en autos con la copia certificada que exhibió la autoridad demandada (visible a fojas 364 a 376 de autos), así como por el reconocimiento expreso de la autoridad demandada, lo cual hace prueba plena de su existencia con fundamento en los artículos 285, fracciones I y III, 322, fracción V, 323, 400 y 405, del Código Civil Adjetivo, de aplicación supletoria en materia contencioso administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, penúltimo párrafo, de la Ley del Tribunal.

TERCERO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede analizar la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por la Comisión del Servicio Profesional.

La autoridad demandada en su contestación manifestó que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 54, fracción IV, y 41, fracción II, de la Ley del Tribunal, de subsecuente inserción:

"ARTÍCULO 54. *El juicio ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es improcedente contra actos o resoluciones:*

(...)

IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento expreso o tácito, entendiéndose por este último cuando no se promovió medio de defensa en los términos de las Leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos de la Ley.

(...)"

"ARTÍCULO 55.- *Procede el sobreseimiento del juicio:*

(...)

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

(...)"



Esto, sostiene la demandada, dado que la resolución impugnada le fue notificada a la actora por estrados el veintinueve de julio de dos mil veintiuno –los cuales fueron retirados el cuatro de agosto siguiente-, por lo que a la fecha en que se presentó la demanda había fenecido el plazo de quince días previsto en el artículo 62 del ordenamiento legal en cita para interponer juicio contencioso administrativo.

Notificación que se practicó por estrados, refiere la autoridad demandada, dado a que el miembro policiaco omitió comparecer a la audiencia de ley dentro del procedimiento de separación definitiva instaurado en su contra –celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve-, no obstante que fue notificado legal y personalmente del acuerdo de inicio de procedimiento, por lo que en la citada audiencia se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de inicio de referencia atinente a que se le realizarían las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, por estrados, en términos del artículo 123 del Reglamento del Servicio Profesional y 155 de la Ley de Seguridad Pública.

Por su parte, **la parte actora** en su escrito inicial de demanda señaló **bajo protesta de decir verdad que el día veintidós de septiembre de dos mil veintiuno tuvo conocimiento de la resolución impugnada**, fecha en que se presentó a las instalaciones de la autoridad demandada, en donde le fue entregada copia de la resolución definitiva de ocho de julio de dos mil veintiuno, indicándole personal que labora ahí que se le había notificado el veintinueve del mismo mes y año mediante estrados de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional.

Asimismo, en su demanda la actora impugnó la legalidad de las notificaciones por estrados de la resolución impugnada, dado que el veinte de agosto de dos mil veinte presentó escrito ante la autoridad demandada en el que señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones dentro del procedimiento administrativo instaurado en su contra; solicitud que refiere fue acordada por la autoridad mediante auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, el cual le fue notificado personalmente ese mismo día.

Que el artículo 178 de la Ley de Seguridad Pública y artículo 211 del Reglamento del Servicio Profesional disponen que las notificaciones que se deban realizar a los miembros posteriores a las del acuerdo de inicio de procedimiento de

remoción se realizarán en el domicilio que para tales efectos se hubiere señalado por aquellos.

Por tanto, refiere la demandante que al haberse señalado domicilio procesal, la notificación de la resolución definitiva de ocho de julio de dos mil veintiuno se debió haber notificado de manera personal y no por estrados.

Por su parte, la **autoridad demandada** en relación a lo manifestado por la demandante, sostuvo la validez de la notificación por estrados, dado que de conformidad con los artículos 123, fracción IV, y 125 del Reglamento del Servicio Profesional, 183 de la Ley de Seguridad Pública y 112 del Código Civil Adjetivo, señalan puntualmente que el momento procesal oportuno para señalar domicilio –en el procedimiento administrativo- es en la audiencia de ley respectiva, a la cual el miembro policiaco no se presentó a señalar domicilio para recibir notificaciones y, en consecuencia, se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de inicio de procedimiento, relativo a que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se realizarían por estrados de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional.

Estudio de la causal de improcedencia antes reseñada:

Precisado lo anterior, se advierte **que la cuestión jurídica a resolver en el presente considerando** consiste en determinar si la notificación de la resolución impugnada fue legal o ilegal, a fin de establecer la fecha en que la actora tuvo conocimiento de la resolución impugnada para determinar si la demanda fue presentada en el plazo previsto por el artículo 62 de la Ley del Tribunal.

Para resolver la anterior cuestión jurídica, primeramente se debe definir si la autoridad debía de notificar personalmente a la miembro policiaco la resolución definitiva dictada en el procedimiento administrativo ***** (2) atendiendo a que el veinte de agosto de dos mil veinte señaló domicilio procesal en el citado procedimiento para oír y recibir notificaciones.

Posteriormente, determinar si es legal la notificación por estrados de veintinueve de julio de dos mil veintiuno de la resolución definitiva dictada en el referido procedimiento administrativo.



Criterio:

Es **fundado lo alegado por la demandante**. Esta Sala Especializada considera que la notificación de la resolución definitiva dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno en el procedimiento de separación definitiva administrativo ***** (2) se debió notificar personalmente, en términos de los artículos 174, fracción V, y 178 de la Ley de Seguridad Pública y 207, fracción IV, y 211 del Reglamento del Servicio Profesional, al haber señalado la miembro policiaco el veinte de agosto de dos mil veinte domicilio procesal para oír y recibir notificaciones dentro del referido procedimiento administrativo.

Por lo tanto, la notificación por estrados de veintinueve de julio de dos mil veintiuno dentro del expediente administrativo ***** (2) –por la cual se notificó la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno- **es ilegal y, en consecuencia, la demanda fue presentada en el plazo previsto en el artículo 62 de la Ley del Tribunal.**

Justificación:

Los artículos 6, fracciones VI, X y XV, 155, fracción IV, 157, 174, 175, 176, 177 y 178 de la Ley de Seguridad Pública y artículos 2, fracciones IV, V, XIX, 123, fracción IV, 125, 207, 209, 210 y 211, del Reglamento del Servicio Profesional disponen lo siguiente:

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

"ARTÍCULO 6.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

(...)

VI. Comisión: Instancia colegiada de las Instituciones de Seguridad Pública, responsable de conocer y resolver los procedimientos de carrera policial y del régimen disciplinario de los Miembros de las Instituciones Policiales;

X. Contraloría Interna: Órgano de la Dependencia, Sindicatura Municipal o aquél que en los respectivos reglamentos se designe, encargado de la investigación administrativa, de solicitar a la Comisión el inicio del procedimiento de remoción del cargo o separación definitiva y demás facultades a que refiere la Ley y los reglamentos respectivos;

XV. Instituciones de Seguridad Pública: Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las Dependencias y Unidades Administrativas de Seguridad Pública de los Ayuntamientos;

(...)"



"ARTÍCULO 155.- El acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa deberá contener por lo menos lo siguiente:

IV.- El apercibimiento, en caso de que en la audiencia el Miembro no señale domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, **se realizarán en los estrados de la Institución Policial y de las Comisiones.**"

ARTÍCULO 157.- Si el Miembro no señala en la audiencia, domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones, al finalizar ésta, se le hará efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa en el sentido de que las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, **se realizarán en los estrados de la Institución Policial de su adscripción.**

"ARTÍCULO 174.- Las notificaciones y citaciones se harán personalmente, por cédula o por estrados.

Son notificaciones personales:

I.- La aplicación de correcciones disciplinarias;

II.- El acuerdo que ordene y aquel que levante la suspensión preventiva;

III.- El acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa;

IV.- La citación para el desahogo de pruebas;

V.- La resolución definitiva que recaiga al procedimiento de remoción y de separación definitiva; y

VI.- Las demás que ordene la Contraloría Interna o quien ejerza el mando directo sobre la Institución Policial.

"ARTÍCULO 175.- El acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva, responsabilidad administrativa y la suspensión preventiva, podrá notificarse al Miembro en las instalaciones de las Instituciones Policiales, o en el lugar en que se encuentre.

En caso de que el Miembro se niegue a recibir la notificación, se hará constar esta circunstancia asentándose en el acta respectiva, misma que se fijará en los **estrados de la Institución Policial y de la Contraloría Interna.**"

"ARTÍCULO 176.- Cuando el notificador no encontrare persona alguna en el domicilio en la primera visita, levantará constancia del hecho, y regresará dentro de las veinticuatro horas siguientes; en el caso de que en la segunda visita, tampoco encuentre persona alguna, se fijará la cédula de notificación en lugar visible del domicilio, y **en los estrados de la Institución Policial y de la Contraloría Interna.**

Si habiéndose levantado constancia de la primera visita, el notificador encontrare al Miembro dentro del término concedido para la espera, procederá a entender la diligencia de notificación."

"ARTÍCULO 177.- Si el Miembro no vive en el domicilio señalado en el expediente personal o este fuere inexistente, se hará constar



esta circunstancia asentándose en el acta respectiva y se realizará la notificación **por estrados de la Institución Policial y de la Contraloría Interna.**"

"ARTÍCULO 178.- Las notificaciones que se tengan que realizar a personas diversas a los Miembros, se harán en los términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. **Las notificaciones que se deban realizar a los Miembros, diversas y posteriores a las del acuerdo de inicio del procedimiento de remoción y suspensión preventiva, se realizarán en el domicilio que para tales efectos se hubiere señalado por aquellos, siguiendo las reglas establecidas por los artículos 176 y 177 de esta Ley.**

Si el Miembro **no hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad**, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, **se realizarán en los estrados de la Institución Policial y de la Contraloría Interna.**"

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL

"ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

(...)

IV. COMISIÓN: La Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Tijuana

V. SINDICATURA: La Sindicatura Municipal como órgano encargado de llevar cabo los procedimientos de cumplimiento de la ley de responsabilidad y de investigación administrativa, en los términos del presente reglamento y de la Ley Estatal.

(...)

XIX. SECRETARIA: A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Tijuana, Baja California.

(...)"

"ARTÍCULO 123.- El acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa grave deberá contener por lo menos lo siguiente:

(...)

IV. El apercibimiento, en caso de que en la audiencia el miembro no señale domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se realizaran en los estrados de la Secretaría y de la comisión."

"ARTÍCULO 125.- Si el miembro no señala en la audiencia, domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones, al finalizar éste, se le hará efectivo al apercibimiento contenido en el acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa grave en el sentido de que las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, **se realizarán en los estrados de la Secretaría o de la comisión.**"

"ARTÍCULO 207.- Las notificaciones y citaciones se harán personalmente, por cedula o por estados.

Son notificaciones personales:



I. El acuerdo que ordene y aquel que levanta la suspensión preventiva;

II. El acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa;

III. La citación para el deshago de pruebas;

IV. La resolución definitiva que recaiga al procedimiento de remoción y de separación definitiva;

V. Las demás que ordene la comisión o la Sindicatura Municipal."

"ARTÍCULO 209.- Cuando el notificador no encontrare persona alguna en el domicilio en la primera visita, levantara constancia del hecho, y regresara dentro de las veinticuatro horas siguientes; en el caso de que en la segunda visita, tampoco encontré persona alguna, **se fijara la cedula de notificación en el lugar visible del domicilio, y en los estrados de la Secretaría y de la Sindicatura Municipal.**

Si habiéndose levantado constancia de la primera visita, el notificador encontrare al miembro dentro del término concedido para la espera, procederá a entender la diligencia de notificación."

"ARTÍCULO 210.- Si el miembro no vive en el domicilio señalado en el expediente personal o este fuera inexistente, se hará constar esta circunstancia asentándose en el acta respectiva **y se realizara la notificación por estrados de la Secretaria y de la Sindicatura Municipal.**"

"ARTÍCULO 211.- Las notificaciones que se tengan que realizar a personas diversas a los miembros, se harán en los términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. **Las notificaciones que se deban realizar a los miembros, diversas y posteriores a las del acuerdo de inicio del procedimiento de remoción y suspensión preventiva, se realizarán en el domicilio que para tales efectos se hubiere señalado por aquellos, siguiendo las reglas establecidas por los artículo 209 y 210 de este reglamento.**

Si el miembro no hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad, las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se realizaran en los estrados de la Secretaría y de la Sindicatura Municipal."

De los preceptos legales antes transcritos, en lo que interesa, se colige lo siguiente:

- Que en el acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva se deberá contener el apercibimiento de que en caso de que en la audiencia el miembro policiaco no señale domicilio en la ciudad de Tijuana para oír y recibir notificaciones, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se realizaran en los estrados de la Secretaría de Seguridad y de la Comisión.

- Que si el miembro policiaco no señala en la audiencia domicilio en la ciudad de Tijuana para oír y recibir notificaciones, se le hará efectivo al apercibimiento contenido en el acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa grave en el sentido de que las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se realizarán en los estrados de la Secretaría de Seguridad y de la Sindicatura Municipal de Tijuana.

- Que las notificaciones que se deban realizar a los miembros policiacos, diversas y posteriores a las del acuerdo de inicio del procedimiento de remoción y suspensión preventiva, **se realizarán en el domicilio que para tales efectos se hubiere señalado por aquellos**, siguiendo las reglas establecidas por los artículos 176 y 177 de la Ley de Seguridad Pública y 209 y 210 del Reglamento del Servicio Profesional.

- Que se deberá **notificar personalmente al miembro policiaco la resolución definitiva** que recaiga al procedimiento de separación definitiva.

De lo anterior, se aprecia que tanto la Ley de Seguridad Pública como el Reglamento del Servicio Profesional prevén que ante la omisión del miembro policiaco de señalar en la audiencia domicilio para oír y recibir notificaciones, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se realizarán en los estrados de la Secretaría de Seguridad y de la Sindicatura Municipal de Tijuana.

Sin embargo, tal circunstancia no impide que posteriormente el miembro policiaco pueda señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el que se deban practicar aquellas notificaciones que la ley marca como personales, entre ellas la resolución definitiva que recaiga al procedimiento de separación definitiva instaurado en contra del miembro policiaco.

Esto, toda vez que de una interpretación conforme¹ de los artículos 157 y 178 de la Ley de Seguridad Pública y 125 y 211 del Reglamento del Servicio Profesional, a fin de respetar y garantizar el derecho de audiencia del miembro

¹ Método de interpretación el cual exige optar por aquella interpretación de la que derive un resultado más acorde a la Constitución Política de los Estados Mexicanos, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico.

policiazo tutelado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el miembro policiazo puede señalar domicilio para oír y recibir notificaciones posteriormente a la celebración de la audiencia de ley a fin de que se le practiquen personalmente en tal domicilio las notificaciones subsecuentes que deban practicarse de manera personal al miembro policiazo.

Lo anterior, en razón de que los artículos 178 de la Ley de Seguridad Pública y 211 del Reglamento del Servicio Profesional establecen que las notificaciones que se deban realizar a los miembros policiazos, diversas y posteriores a las del acuerdo de inicio del procedimiento de remoción y suspensión preventiva, se realizarán en el domicilio que para tales efectos se hubiere señalado por aquellos en el procedimiento de separación definitiva, siguiendo las reglas establecidas por los artículos 176 y 177 de la citada Ley y 209 y 210 del referido Reglamento.

Es decir, los referidos artículos no limitan a que el miembro policiazo haya señalado domicilio en la audiencia de ley para efectos de que se le realicen las notificaciones de carácter personal diversas y posteriores al acuerdo de inicio de procedimiento de remoción y suspensión preventiva, sino únicamente establece la limitante de que el miembro policiazo haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en el procedimiento administrativo para efectos de que se le practiquen las subsecuentes notificaciones que sean personales en el domicilio señalado para tal efecto.

Entonces, a fin de no restringir el derecho de audiencia del miembro policiazo tutelado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aquellos casos que el miembro policiazo haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones posteriormente a la audiencia de ley, deben practicarse las subsecuentes notificaciones de carácter personal en tal domicilio.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis VIII.4o.18 C del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que se reproduce a continuación:

NOTIFICACIONES AL DECLARADO EN REBELDÍA. DEBEN HACERSE POR CÉDULA, PERO NO CUANDO COMPARECIÓ AL JUICIO A DESTIEMPO Y SEÑALÓ DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). El artículo 778 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila prevé que una vez declarada la rebeldía de alguna de las partes, la notificación de las posteriores resoluciones judiciales, incluso las de carácter personal, se

realizarán por medio de cédula que se publicará en los estrados del juzgado. Ahora bien, de una adecuada interpretación de tal precepto se concluye que resulta aplicable únicamente al supuesto de los rebeldes que definitivamente no comparecieron a juicio, pero no de aquel que compareció, aunque haya sido a destiempo, y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, caso en el cual las subsecuentes notificaciones deben practicarse como procedan para todas las partes conforme a la ley, pues no existe razón jurídica para restringirle sus garantías de audiencia, igualdad procesal y acceso a la administración de justicia.

Registro digital: 177246; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Novena Época; Materias(s): Civil; Tesis: VIII.4o.18 C; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1503; Tipo: Aislada.

En el caso, de la copia certificada del expediente administrativo ***** (2) (visible a fojas 115 a 224 de autos), de eficacia demostrativa plena conforme a lo dispuesto por los artículos 285, fracción III, 322, fracción II, 323 y 405, del Código Civil Adjetivo, de aplicación supletoria, con fundamento en el artículo 41, penúltimo párrafo, de la Ley del Tribunal, se advierte que obra audiencia de ley de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la cual se hizo constar la incomparecencia de la parte actora.

Asimismo, en la referida audiencia la autoridad demandada hizo efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de inicio de procedimiento y ordenó realizar las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, en los estrados de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional y de la Sindicatura Procuradora Municipal de Tijuana.

Ahora bien, **no es un hecho controvertido por las partes** que el **veinte de agosto de dos mil veinte la parte actora presentó escrito ante la Comisión del Servicio Profesional en el que señaló domicilio procesal** para oír y recibir notificaciones dentro del procedimiento de separación definitiva ***** (2) instaurado en su contra.

Hecho que se corrobora con el acuse de la referida promoción suscrita por la demandante (visible a fojas 58 a 61 de autos), que contiene sello de recibido de veinte de agosto de dos mil veinte de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional, del que se advierte en su proemio que señaló domicilio procesal ubicado en ***** (3), tal como se advierte de la siguiente transcripción (foja 58 de autos):

"Que por medio del presente recurso, vengo a señalar domicilio procesal para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en

***** (3), para efectos de comunicación continua, señaló la dirección de correo electrónico (...)"

En ese sentido, si bien inicialmente ante la omisión de la miembro policiaco de señalar en la audiencia de ley domicilio para oír y recibir notificaciones procedían las subsecuentes notificaciones por estrados atendiendo a lo dispuesto por los artículos 157 de la Ley de Seguridad Pública y 211 del Reglamento del Servicio Profesional, lo cierto es que la parte actora señaló el veinte de agosto de dos mil veinte domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en el procedimiento.

De ahí que al haber señalado en tal fecha domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, atento a lo expuesto en el presente fallo, **las notificaciones de carácter personal subsecuentes** al señalamiento del domicilio procesal efectuado por la miembro policiaco el veinte de agosto de dos mil veinte, **debían realizarse en el domicilio señalado para tal efecto**, atento a lo dispuesto por los artículos 178 de la Ley de Seguridad Pública y 211 del Reglamento del Servicio Profesional.

En ese orden de ideas, si la resolución definitiva dictada dentro del procedimiento de separación definitiva ***** (2) se emitió el ocho de julio de dos mil veintiuno, **la autoridad debió haber practicado la notificación de dicha resolución de manera personal** en el domicilio señalado por la miembro policial el veinte de agosto de veinte, en términos de los preceptos legales antes invocados, en relación con los artículos 174, fracción V, y 207, fracción IV, del Reglamento del Servicio Profesional, que prevén como notificación personal la resolución definitiva que recaiga al procedimiento de separación definitiva.

Sin embargo, la autoridad demandada notificó la resolución definitiva dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno en el expediente ***** (2) el veintinueve de julio de dos mil veintiuno por estrados de la Sindicatura Procuradora Municipal de Tijuana y de la Secretaría de la Comisión del Servicio Profesional, según se advierte de las copias certificadas de las cédulas de notificación por estrados aportadas por la autoridad demandada (visibles a fojas 201 y 210 de autos); documentales de eficacia demostrativa plena conforme a lo dispuesto por los artículos 285, fracción III, 322, fracción II, 323 y 405, del Código Civil Adjetivo, de aplicación supletoria, con fundamento en el artículo 41, penúltimo párrafo, de la Ley del Tribunal.

De lo anterior, es evidente que la autoridad **fue omisa en notificar la resolución definitiva dictada en el expediente ***** (2) de manera personal a la miembro policiaco**, en términos de lo dispuesto por los artículos 174, fracción V, y 178 de la Ley de Seguridad Pública y 207, fracción IV, y 211 del Reglamento del Servicio Profesional, al haber señalado la demandante el veinte de agosto de dos mil veinte domicilio procesal para oír y recibir notificaciones dentro del referido procedimiento administrativo.

Por lo tanto, **resulta ilegal la notificación por estrados de la resolución definitiva** dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno en el procedimiento de separación definitiva ***** (2), atendiendo a que **se omitió notificar personalmente a la parte actora** de conformidad con lo dispuesto por los preceptos legales antes invocados.

Conclusión.

Ante lo fundado de los argumentos hechos valer por la actora en contra de la notificación por estrados de la resolución impugnada conforme lo previamente expuesto, **se tiene que dicha notificación es ilegal, lo que trae como consecuencia que se tenga como fecha en que la parte actora tuvo conocimiento de la resolución impugnada desde la fecha en que manifestó conocerla**, a saber, el **veintidós de septiembre de dos mil veintiuno**, fecha en que refiere en su demanda se presentó en las instalaciones de la autoridad demandada, en donde le fue entregada copia de la resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno.

Entonces, al resultar ilegal la notificación de la resolución impugnada, para efectos de determinar si la parte actora promovió juicio contencioso en el plazo legal, resulta aplicable al caso lo previsto en el artículo 62, primer párrafo, de la Ley del Tribunal², atinente a que la demanda deberá formularse por escrito y presentarse ante la Sala correspondiente dentro de los quince días siguientes al día en que se haya tenido conocimiento de la resolución impugnada.

² **"ARTÍCULO 62.** La demanda deberá formularse por escrito, salvo el caso previsto en el artículo 150 de esta Ley, y presentarse directamente ante el Órgano de Primera Instancia correspondiente al domicilio del demandante o enviarse por correo certificado, dentro de los quince días siguientes, a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnados conforme a la ley del acto, o al día en que se haya tenido conocimiento del mismo."



En ese sentido, **se concluye que la demanda fue presentada dentro del término legal previsto en el artículo 62, primer párrafo, de la Ley del Tribunal.**

Lo anterior en razón que la parte actora tuvo conocimiento de la resolución impugnada el **veintidós de septiembre de dos mil veintiuno**, fecha en que en su demanda manifestó conocerla.

Por lo tanto, el plazo de quince días para efectos de su impugnación en términos del artículo 62, primer párrafo, de la Ley del Tribunal inició a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de la resolución administrativa, esto es el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, **siendo el último día para presentar la demanda el catorce de octubre de dos mil veintiuno**; en consecuencia, **al haber presentado la actora su demanda el cinco de octubre de dos mil veintiuno**, según se advierte del sello de recibido de Oficialía de Partes Común de este Tribunal correspondiente a la ciudad de Tijuana, Baja California (obstante en la foja 1 de autos), **estaba dentro del plazo de quince días que dispone el artículo 62 invocado.**

Para una mejor comprensión, se inserta el siguiente cuadro:

Fecha en que el actor tuvo conocimiento de la resolución impugnada.	22 de septiembre de 2021 (miércoles)
Primer día del cómputo	23 de septiembre de 2021 (jueves)
Segundo día del cómputo	24 de septiembre de 2021 (viernes)
Días inhábiles (sábado y domingo)	25 y 26 de septiembre de 2021
Tercer día del cómputo	27 de septiembre de 2021 (lunes)
Cuarto día del cómputo	28 de septiembre de 2021 (martes)
Quinto día del cómputo	29 de septiembre de 2021 (miércoles)
Sexto día del cómputo	30 de septiembre de 2021 (jueves)
Séptimo día del cómputo	1 de octubre de 2021 (viernes)
Días inhábiles (sábado y domingo)	2 y 3 de octubre de 2021
Octavo día del cómputo	4 de octubre de 2021 (lunes)
Noveno día del cómputo (presentación de la demanda)	5 de octubre de 2021 (martes)
Décimo día del cómputo	6 de octubre de 2021 (miércoles)
Décimo primer día del cómputo	7 de octubre de 2021 (jueves)
Décimo segundo día del cómputo	8 de octubre de 2021 (viernes)
Días inhábiles (sábado y domingo)	9 y 10 de octubre de 2021
Día inhábil (día festivo)	11 de octubre de 2021 (lunes)
Décimo tercer día del cómputo	12 de octubre de 2021 (martes)
Décimo cuarto día del cómputo	13 de octubre de 2021 (miércoles)
Último día del plazo	14 de octubre de 2021 (jueves)

Se precisa que en el cómputo anterior deben descontarse los días veinticinco y veintiséis de septiembre, dos, tres, nueve, diez y once de octubre, todos de dos mil veintiuno, por ser días inhábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 53, fracción II, de la Ley del Tribunal, en relación con el artículo 6 del Reglamento Interior de este Tribunal y el Calendario Oficial de Labores del Tribunal correspondiente al año dos mil veintiuno.

De ahí, que resulta **infundada** la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por la autoridad demandada, atinente a que no se promovió juicio contencioso administrativo en el plazo previsto en ley.

CUARTO.- Motivos de inconformidad.

Atendiendo al principio de economía procesal, se tienen por reproducidos los motivos de inconformidad planteados por el demandante, toda vez que la Ley del Tribunal no establece como obligación transcribirlos; sin demérito de que, en su caso, a fin de satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia, se realice el examen de los argumentos planteados, una vez precisados los puntos sujetos a debate.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/44 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

QUINTO.- Requisito de permanencia.

En primer orden, se precisa la pérdida del requisito de permanencia imputado a la parte actora en el procedimiento de separación definitiva *****⁽²⁾ instaurado en su contra.

En la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno la Comisión del Servicio Profesional determinó que el actor incumplió el requisito de permanencia contemplado en el artículo 53, fracción VI, del Reglamento del Servicio Profesional.

El artículo aludido establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 53.- *La permanencia y desarrollo son el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en el presente reglamento para continuar en el servicio activo de la Secretaría, debiendo conservar los siguientes requisitos.*

(...)

VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

(...)"

Conducta:

La autoridad administrativa determinó que se incumplió con el citado precepto legal, en razón de que la demandante, en su carácter de agente de Policía Comercial, Bancaria e Industrial adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, no aprobó el proceso de evaluación de control de confianza que le fue practicado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California.

SEXTO.- Estudio del motivo de inconformidad tercero.

Por cuestión de técnica jurídica, se procede al estudio del motivo inconformidad tercero, en su segunda parte (visible a páginas 14 a 16 del escrito inicial de demanda), en el que la **parte actora hace valer**, en esencia, que la resolución impugnada es nula, por lo siguiente:

- Que la Comisión del Servicio Profesional sustentó la emisión del acuerdo de inicio de procedimiento y de la

resolución impugnada en las sesiones de seis de septiembre de dos mil dieciocho y ocho de julio de dos mil veintiuno, respectivamente, sin que se advierta la existencia de las referidas actas de sesión donde se determinó iniciar y resolver el procedimiento administrativo instaurado en su contra, en donde, además, se aprecie que la convocatoria –de los miembros de la Comisión- fue efectuada en los términos reglamentarios, que haya habido quorum en la primera o segunda convocatoria y que los vocales hayan consultado previamente a la sesión el expediente formado con motivo del asunto sometido a su conocimiento y resolución de la Comisión.

- Que lo anterior implica una violación a las formalidades para la formación de la voluntad de la Comisión del Servicio Profesional al no estar satisfechas las exigencias previstas para tal efecto en los artículos 197, fracciones V, VI, y X, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 y 206 del Reglamento del Servicio Profesional.

Por su parte, la **autoridad demandada al contestar la demanda**, en relación al motivo de inconformidad en examen, refirió que no puede ser materia de estudio la legitimidad de los funcionarios suplentes que signaron la resolución impugnada y el acuerdo de inicio de procedimiento.

Además, sostiene que la parte actora tiene la carga probatoria de acreditar su pretensión sin que haya ofrecido prueba alguna, en términos de las tesis del Tribunal Fiscal de la Federación –actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa- de rubros: "CARGA PROBATORIA.- CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA CUANDO AFIRMA DIVERSOS HECHOS EN LOS QUE APOYA SU ACCIÓN", "CARGA PROBATORIA.- CORRESPONDE A QUIEN AFIRMA LA REALIZACIÓN DE UN HECHO", "PRUEBA. SU CARGA CUANDO SE HACEN AFIRMACIONES." y "JUICIO FISCAL.- ES A LA ACTORA A QUIEN CORRESPONDE DEMOSTRAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE SU ACCIÓN".

Por último, sostiene que es inoperante el motivo de inconformidad dado que la parte actora no aportó prueba que sustente su dicho.

Punto jurídico a resolver:

Conforme lo antes expuesto, el problema jurídico a resolver implica determinar si la resolución impugnada es nula por haberse omitido las formalidades que el Reglamento del

Servicio Profesional establece para la formación de la voluntad de la Comisión en sesión para determinar el acuerdo de inicio de procedimiento y la resolución que puso fin al procedimiento de separación definitiva instaurado en contra del demandante.

Criterio:

Es **fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada** lo alegado por el actor, en el sentido de que la resolución es nula por violación a las formalidades para la formación de la voluntad de la Comisión del Servicio Profesional al no estar satisfechas las exigencias previstas para tal efecto en los artículos 197, fracciones V, VI, y X, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 y 206 del Reglamento del Servicio Profesional.

Lo anterior, por no haberse acreditado la existencia de las convocatorias y sesiones de la Comisión del Servicio Profesional en las que el referido órgano colegiado hubiere determinado iniciar y resolver el procedimiento de separación definitiva seguido en contra del demandante.

Justificación:

Los artículos 180, 189, 190, 191, 192, 197, fracciones I, II, V, VI, IX, X y XV, 198, fracciones I a IX y XI, 199, fracciones I a IV, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 220 del Reglamento del Servicio Profesional, disponen lo siguiente:

"Artículo 180.- La comisión del servicio profesional de carrera, es el órgano colegiado, de carácter honorífico, encargado de conocer, resolver e imponer las sanciones, así como recibir y resolver el recurso correspondiente que interponga el probable responsable. Tratándose de conductas probablemente constitutivas de delito o violaciones a leyes administrativas, deberá hacerlas del conocimiento, sin demora, a la autoridad competente, independientemente de la sanción, corrección disciplinaria o acto de separación que deba ejecutar dicha comisión."

"Artículo 189.- Se establece la comisión como instancia colegiada de la Secretaría, para conocer y resolver toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos del servicio profesional de carrera policial y el régimen disciplinario de los miembros."

"Artículo 190.- La Comisión sesionará en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por convocatoria emitida por el Secretario en los términos de este Reglamento"



"Artículo 191.- Habrá quórum en las sesiones de la comisión con la mitad más uno de sus integrantes."

"Artículo 192.- El Secretario deberá elaborar un acta en la que se registre el desarrollo, las resoluciones y acuerdos tomados en cada sesión."

"Artículo 197.- Atribuciones del Presidente:

- I. Presidir las sesiones de la comisión;
- II. Participar en las sesiones, acuerdos y resoluciones de la comisión, con voz y voto, teniendo en caso de empate el voto de calidad;
- (...)
- V. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, por conducto del Secretario técnico de la comisión;
- VI. Declarar instaladas o clausuradas las sesiones de la comisión;
- (...)
- IX. Dirigir los debates y conservar el orden durante las sesiones;
- X. Autorizar y firmar con el Secretario técnico, las actas de la comisión, en las que se harán constar las deliberaciones, acuerdos y resoluciones que se tomen;
- (...)
- XV. Turnar al Secretario técnico para su presentación ante la comisión, los asuntos que a éste le competan y de los que tenga conocimiento por razones de su encargo"

"Artículo 198.- Son atribuciones del Secretario Técnico:

- I. Elaborar y notificar a los demás integrantes, el calendario de sesiones, así como convocatorias;
- II. Citar oportunamente a sesiones ordinarias y extraordinarias, a convocatoria del presidente, debiéndose citar con un lapso de 48 horas de anticipación y en forma inmediata, respectivamente;
- III. Solicitar autorización al presidente para el inicio de la sesión y dar lectura al orden del día;
- IV. Realizar el pase de lista de los integrantes de la comisión, así como dar cuenta del número de expedientes a conocer de cada sesión y proponer el orden del día;
- V. Verificar y declarar la existencia del quórum legal;
- VI. Levantar el acta de las sesiones;
- VII. Certificar, dar fe y autorizar los actos y resoluciones que emita la comisión;
- VIII. Recibir y llevar el control de las votaciones de los integrantes en las sesiones de la comisión y notificar a la misma el resultado del sufragio, en los términos del presente reglamento;
- IX. Declarar al término de cada sesión de la comisión, los resultados de la misma;
- (...)
- XI. Presentar a la comisión los asuntos que se deban de resolver;
- (...)"

"Artículo 199.- Son atribuciones de los Vocales:

- I. Asistir a las sesiones de la comisión;
- II. Consultar previamente a las sesiones, los expedientes formados con motivo de los asuntos que se sometan a su conocimiento y resolución de la comisión;
- III. Votar y en su caso suscribir, los acuerdos y resoluciones de la comisión;

IV. Firmar las actas de las sesiones y en su caso los acuerdos o resoluciones que determine la comisión;
(...)"

"Artículo 200.- La comisión sesionará ordinariamente cuando menos una vez al mes y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias."

"Artículo 201.- El quórum legal de las sesiones será del cincuenta por ciento más uno de sus integrantes, que cuenten con voz y voto. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los presentes, teniendo el presidente o en caso de su ausencia, quien lo supla, voto de calidad en caso de empate.

Cuando no se integre el quórum, se citará mediante una segunda convocatoria que se expida, la sesión podrá celebrarse válidamente a partir de las veinticuatro horas siguientes, con las personas que concurran a la misma, las decisiones y acuerdos se tomarán con la mayoría de los integrantes que se encuentren presentes; ninguna decisión será válida si no se encuentra presente el presidente o quien lo supla en su ausencia."

"Artículo 202.- La votación de los integrantes de la comisión se realizará en forma secreta, mediante boletas, en los procedimientos relativos al régimen disciplinario y en aquellos casos que así lo determine la propia comisión."

"Artículo 203.- La convocatoria para las sesiones ordinarias, deberán notificarse personalmente a los integrantes de la comisión, por escrito, fax, correo electrónico o por cualquier otro medio, dejando constancia del mismo y del resultado de la notificación, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha fijada para su celebración y debiendo especificar el lugar, fecha y hora en que tendrá verificativo la sesión, así como los asuntos a tratar.

"Artículo 204.- La convocatoria para sesiones extraordinarias deberá notificarse a los integrantes de la comisión en forma inmediata y por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo anterior."

"Artículo 205.- En todas las sesiones que realice la comisión, se levantará acta en la que se indique lugar, día y hora de celebración, lista de asistencia, el orden del día, así como acuerdos que se tomen, los cuales deberán ser idénticos por número progresivo, las actas deberán acompañarse de anexos, relacionados con cuestiones relativas a los asuntos tratados en las sesiones y ser firmadas por todos los asistentes de la sesión. Las sesiones tendrán carácter privado.

Los acuerdos y resoluciones deberán ser firmados y rubricados por el presidente y por el Secretario técnico de la comisión."

"Artículo 206.- La comisión sesionará en la sede de la Secretaría, o en el lugar que sea destinado para ello por acuerdo de la misma."

"Artículo 220.- Si la naturaleza del asunto a tratar corresponde a una controversia que se suscite en relación con el régimen disciplinario, la comisión se integrará de la forma siguiente:

(...)"

De una interpretación armónica de estos artículos se obtiene que la **Comisión del Servicio Profesional, en su actuar, debe observar los principios de sesión, quórum y deliberación**; lo cual entre otras cosas implica que la voluntad de ese órgano colegiado debe expresarse en una reunión oficial de sus integrantes, en la que haya mediado una convocatoria, exista un quórum para su válida constitución, se den condiciones para la deliberación y las decisiones que se tomen sean por la mayoría de sus miembros.

Lo anterior es así, puesto que, al ser un órgano colegiado, su actuación necesariamente debe darse en sesiones en la que participen sus miembros, para que la voluntad que se exprese, sea precisamente colegiada.

Es ilustrativo al respecto Gabino Fraga, quien en su Tratado de Derecho Administrativo sostiene lo siguiente³: *"Constituye, además, una regla fundamental en la materia (se refiere a la voluntad expresada por órganos colegiados) la de que todas las decisiones deben de ser tomadas en reunión oficial de los integrantes de dicho órgano, pues de otro modo no sería este el que estaría actuando, sino individuos asilados que no tienen con este carácter ninguna competencia legal."*

Por su parte, José Roberto Dromi sobre este tópico razona que⁴: *"En los órganos colegiados, la voluntad emanada de un solo órgano-institución formado por varios órganos individuos. Los actos de los órganos colegiados deben emitirse observando los principios de sesión, quórum, y deliberación. Las reglas para la preparación y emisión de actos de órganos colegiados son: 1) El presidente del órgano colegiado hará la convocatoria, comunicándola a los miembros con una antelación mínima, salvo caso de urgencia, indicando lugar, fecha, hora y puntos del orden del día. 2) El orden del día lo fija el presidente. Los miembros tiene derecho a que se incluyan en él los puntos que señalen, pudiéndolo hacer hasta media hora antes de la señalada para el comienzo de la sesión. Abierta ésta y como primera medida, el cuerpo decidirá por simple mayoría lo relativo a la inclusión y orden de tratamiento de los temas así propuestos. 3) Queda válidamente constituido el órgano colegiado, aunque no se hubieran cumplido todos los requisitos de la convocatoria, siempre que se hallen formalmente reunidos todos los miembros y así lo resuelvan por unanimidad. 4) el quórum para la válida constitución del órgano colegiado, es el de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existe quórum, por lo común el órgano se constituirá en segunda convocatoria, siendo suficiente para ello la asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, en número no inferior a tres. 5) las decisiones serán adoptadas por mayoría absoluta de los miembros presentes. 6) No podrán ser objeto de decisión asuntos que no figuren en el orden del día, salvo resolución unánime. 7) Ninguna decisión podrá ser*

³ Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, 46ª edición, pagina 269.

⁴ Dromi José Roberto. Manual de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Astrea, Páginas 129 y 130.

adoptada por el órgano colegiado sin haber sometido la cuestión a la deliberación de sus miembros, otorgándoles razonable posibilidad de expresar su opinión. 8) los miembros pueden hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que la fundan. Cuando voten en contra y hagan constar su oposición motivada quedan exentos de las responsabilidades que puedan derivarse de las decisiones del órgano colegiado."

En el caso, de la copia certificada del expediente administrativo ***** (2) (visible a fojas 115 a 224 de autos), de eficacia demostrativa plena, se advierte que obra acuerdo de inicio de procedimiento seis de septiembre de dos mil dieciocho dictado por la Comisión del Servicio Profesional (visible a fojas 155 a 174 de autos), en el que se señaló lo siguiente (foja 173 de autos):

*"Así lo resolvió y firma por unanimidad de votos en Sesión Extraordinaria de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, ante la presencia de su Secretario Técnico, el Lic. ***** (1), quien autoriza y da fe"*

Asimismo, de la copia certificada de la resolución impugnada, de valor probatorio pleno, se aprecia que se asentó lo siguiente (reverso foja 216 de autos):

*"Así lo resolvió y firma por unanimidad de votos, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, en la Octogésima Primera Sesión Ordinaria de fecha ocho de julio de dos mil veintiuno, ante la presencia de su Secretario Técnico, ***** (1), quien autoriza y da fe"*

De la anterior transcripción se advierte que la Comisión del Servicio Profesional sustentó la emisión del acuerdo de inicio de procedimiento y la resolución impugnada en lo resuelto en la sesión extraordinaria de seis de septiembre de dos mil dieciocho y en la octogésima primera sesión ordinaria de ocho de julio de dos mil veintiuno, respectivamente.

Ahora bien, de las constancias en autos se advierte que la **autoridad demandada fue omisa en acreditar** la existencia de la sesión extraordinaria de seis de septiembre de dos mil dieciocho y de la octogésima primera sesión ordinaria de ocho de julio de dos mil veintiuno.

Asimismo, tampoco acreditó que se hubiere convocado y notificado a los miembros de la Comisión del Servicio Profesional, así como que se hubiere discutido y votado que se iniciara procedimiento de separación definitiva en contra de la actora y se resolviera el referido procedimiento administrativo por el indicado órgano colegiado, en los términos de los artículos 180, 189, 190, 191, 192, 197, fracciones I, II, V, VI, IX, X y XV, 198, fracciones I a IX y XI, 199, fracciones I a IV, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 220 del Reglamento del Servicio Profesional.

Esto, al no haber aportado al juicio prueba alguna con la que se acredite de manera fehaciente que se convocó y notificó a los miembros de la Comisión del Servicio Profesional a la sesión extraordinaria de seis de septiembre de dos mil dieciocho y a la octogésima primera sesión ordinaria de ocho de julio de dos mil veintiuno; asimismo, que se llevaron a cabo las referidas sesiones en las cuales el órgano colegiado discutió y votó el iniciar y resolver el procedimiento de separación definitiva *****⁽²⁾, respectivamente.

En efecto, aquí cabe precisar que cuando el particular controvierte en juicio que la resolución que pone fin al procedimiento de separación definitiva se emitió inobservando el procedimiento conducente para que la Comisión del Servicio Profesional pudiera manifestar su voluntad en términos de los artículos del Reglamento del Servicio Profesional antes reproducidos, **corresponde a la autoridad demandada la carga de demostrar** que la indicada resolución definitiva deriva de la decisión adoptada por la citada Comisión en sesión, siguiendo las formalidades que el reglamento establece para la formación de la voluntad de ese órgano colegiado.

Lo anterior, en razón que los artículos 277 y 278 del Código Civil Adjetivo⁵, de aplicación supletoria al juicio contencioso administrativo de conformidad con el artículo 41, penúltimo párrafo, de la Ley del Tribunal, establecen como regla general en arrojar la carga de la prueba a quien hace

⁵ **"ARTÍCULO 277.-** El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.

"ARTÍCULO 278.- El que niega sólo será obligado a probar:

- I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;
- II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante;
- III.- Cuando se desconozca la capacidad;
- IV.- Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción."

una afirmación, mientras que se releva a quien sostiene una negación pura y simple.

En ese sentido, en el presente juicio la parte actora sustenta su pretensión -consistente en la nulidad de la resolución impugnada- en el hecho de que la Comisión del Servicio Profesional no siguió las formalidades establecidas en el Reglamento del Servicio Profesional para la formación de la voluntad de dicho órgano colegiado para efectos de emitir la resolución impugnada.

Entonces, la afirmación del actor implica un hecho de naturaleza negativa, por lo que corresponde a la autoridad demandada la carga de demostrar que la resolución impugnada si cumplió con las formalidades que el reglamento establece para la formación de la voluntad de la Comisión en sesión.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis de jurisprudencia I.7o.A. J/45 del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se reproduce a continuación:

CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBREN EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE AQUÉLLA CONSERVA EN CUSTODIA. El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de nulidad, establece que el actor está obligado a probar los hechos constitutivos de su acción. Sin embargo, en el ámbito del derecho administrativo opera un principio de excepción que obliga a la autoridad a desvirtuar, inclusive, las afirmaciones sobre la ilegalidad de sus actuaciones que no estén debidamente acreditadas mediante el acompañamiento en autos de los documentos que las contengan, cuando éstos obren en los expedientes administrativos que aquélla conserva en custodia.

Registro digital: 168192; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Novena Época; Materias(s): Administrativa; Tesis: I.7o.A. J/45; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2364; Tipo: Jurisprudencia.

En ese orden de ideas, la autoridad demandada únicamente anexó a su demanda copia certificada del expediente administrativo ***** (2) seguido en contra de la parte actora.

Documental que de un examen se advierte que no contienen constancia de la convocatoria ni de la notificación a los miembros de la Comisión del Servicio Profesional a las sesión extraordinaria de seis de septiembre de dos mil dieciocho y sesión ordinaria de ocho de julio de dos mil veintiuno, ni del acta de las referidas sesiones en las que se discutió y votó el inicio y resolución del procedimiento de separación definitiva instaurado en contra del actor, respectivamente.

Por lo tanto, tal circunstancia implica que la resolución impugnada se emitió inobservando los artículos 180, 189, 190, 191, 192, 197, fracciones I, II, V, VI, IX, X y XV, 198, fracciones I a IX y XI, 199, fracciones I a IV, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 220 del Reglamento del Servicio Profesional, así como los principios de sesión, quórum y deliberación que de ellos emanan.

Lo cual implica que la voluntad de ese órgano colegiado no se manifestó siguiendo el procedimiento conducente, **lo que conlleva a declarar nula la resolución impugnada.**

Por otra parte, en relación a los **argumentos de defensa de la autoridad demandada en juicio** respecto al motivo de inconformidad en análisis, en los que señaló:

- 1)** Que no puede ser materia de estudio la legitimidad de los funcionarios suplentes que signaron la resolución impugnada y el acuerdo de inicio de procedimiento.
- 2)** Que la parte actora tiene la carga probatoria de acreditar su pretensión sin que haya ofrecido prueba alguna.
- 3)** Que es inoperante el motivo de inconformidad dado que la parte actora no aportó prueba que sustente su dicho.

Los argumentos esgrimidos son **infundados.**

Es **infundado** lo alegado por la autoridad en el **inciso 1)** en razón de que no fue materia de análisis del presente fallo la legitimidad de los funcionarios suplentes que signaron la resolución impugnada y el acuerdo de inicio de procedimiento, sino si en el procedimiento de separación definitiva la Comisión del Servicio Profesional cumplió con las formalidades que el reglamento establece para la formación de

la voluntad del citado órgano colegiado en sesión para dictar el acuerdo de inicio de procedimiento y la resolución definitiva del indicado procedimiento administrativo.

Estando acreditado en autos que la voluntad de la Comisión del Servicio Profesional como órgano colegiado no se manifestó siguiendo el procedimiento conducente, atento a lo resuelto en el presente considerando.

Asimismo, son infundados los argumentos indicados en los **incisos 2) y 3)**, en virtud de que- como se expuso en el presente fallo- era carga de la demandada demostrar que la el acuerdo de inicio de procedimiento y la resolución impugnada cumplieran con las formalidades que el reglamento establece para la formación de la voluntad de la Comisión en sesión.

Por lo tanto, el hecho de que la parte actora haya omitido exhibir pruebas para sustentar su motivo de inconformidad, no lo tornaba inoperante.

Asimismo, se precisa que las tesis del Tribunal Fiscal de la Federación -actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa- invocadas por la demandada no son obligatorias para este Tribunal al no existir disposición normativa que así lo establezca, por lo que no resultan aplicables al caso, máxime que, se reitera, es carga de la demandada demostrar que la resolución impugnada si cumplió con las formalidades que el reglamento establece para la formación de la voluntad de la Comisión en sesión.

Conclusión.

Por lo antes expuesto, se concluye que la resolución impugnada carece de legalidad por haberse omitido las formalidades que el Reglamento del Servicio Profesional establece para la formación de la voluntad de la Comisión del Servicio Profesional en sesión para iniciar y resolver el procedimiento de separación definitiva instaurado en contra del demandante, al haberse inobservado los artículos del Reglamento del Servicio Profesional que antes se citaron, así como los principios de sesión, quórum y deliberación que de ellos emanan.

Lo que significa declarar su nulidad con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley del Tribunal, en tanto está precedida de un procedimiento que es fruto de actos

viciados de origen, al no seguirse las formalidades que el reglamento establece para la formación de la voluntad de la Comisión en sesión y, por tanto, la resolución definitiva dictada en el procedimiento de separación definitiva es fruto de actos viciados de origen.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente:

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

Registro digital: 252103; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Séptima Época; Materias(s): Común; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 121-126, Sexta Parte, página 280; Tipo: Jurisprudencia.

En las relatadas condiciones, **con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley del Tribunal, se declara la nulidad de la resolución** dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno por la Comisión del Servicio Profesional en el expediente administrativo ***** (2), por la cual se determinó la separación definitiva de la actora como miembro policiaco adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California.

Es así que, al ser fundado el motivo de inconformidad examinado resulta innecesario el estudio del resto de los conceptos de nulidad expuestos por el actor, ya que de resultar fundados en nada variaría el sentido del presente fallo, sin que ello implique desatender el principio de exhaustividad, como se explicará enseguida.

SÉPTIMO.- Efectos de la nulidad.

Aquí, cabe precisar que, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109, fracción III, de la Ley del Tribunal la declaración de nulidad por un vicio de procedimiento traería como consecuencia reponer el procedimiento; sin embargo, conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de subsecuente inserción, tratándose de procedimientos administrativos mediante los cuales se remueve, cesa o de cualquier forma se

da por terminada la relación administrativa que une a los miembros de las corporaciones policiales con la administración pública, se actualiza una excepción a la regla establecida en el precepto legal mencionado.

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS. Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) (*), de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el quejoso impugne en amparo directo la ilegalidad de la resolución definitiva, mediante la cual haya sido separado del cargo que desempeñaba como servidor público de una institución policial, por violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación; tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las cosas al estado en el que se encontraban previo a la violación, por existir una restricción constitucional expresa, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, sino que el efecto de la concesión del amparo debe ser de constreñir a la autoridad responsable a resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso. En estos casos, la reparación integral consiste en ordenar a la autoridad administrativa: a) el pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho, y b) la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada.

Registro digital: 2012722; Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Materias(s): Común, Administrativa; Tesis: 2a./J. 117/2016 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 897; Tipo: Jurisprudencia.

Así, conforme al criterio de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, la nulidad decretada no debe ser para efectos de reponer el procedimiento, sino para constreñir a la autoridad a resarcir integralmente a la parte actora en los derechos de los que fue privado con motivo de la resolución declarada nula.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 109 de la Ley del Tribunal **se condena a la Comisión del Servicio Profesional a lo siguiente:**

1.- Emita una resolución en la que deje insubsistente la declarada nula.

2.- Realice los actos necesarios para que se hagan las anotaciones correspondientes en el expediente personal del actor y en el Registro Nacional de Seguridad Pública.

3.- Gire los oficios correspondientes a todas las autoridades que fueron informadas de la resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno en el procedimiento administrativo ***** (2), en los que les haga saber el sentido del presente fallo, para que hagan las anotaciones correspondientes en sus registros.

4.- Realice los actos tendientes a que se paguen al actor las prestaciones a que tenga derecho, las cuales deben comprender la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde el día en que dejó de recibir dichas prestaciones con motivo de la suspensión preventiva decretada en el procedimiento administrativo ***** (2) hasta el día en que se realice el pago de las prestaciones correspondientes o sea reinstalada en el cargo y a que, de no reinstalarse a la actora, se le pague la indemnización que deberá comprender el pago de tres meses de sueldo y de veinte días por cada año laborado.

Lo anterior, en términos de las jurisprudencias 2a./J. 110/2012 (10a.) y 2a. II/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reproducen a continuación:

SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante

el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado.

Registro digital: 2001770; Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Materias(s): Constitucional, Laboral; Tesis: 2a./J. 110/2012 (10a.); Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, página 617; Tipo: Jurisprudencia.

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia normativa constitucional se advierte la obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que

deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos.

Registro digital: 2013440; Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Materias(s): Constitucional, Laboral; Tesis: 2a./J. 198/2016 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 505; Tipo: Jurisprudencia.

Asimismo, se precisa que para el pago de las prestaciones antes indicadas, la autoridad deberá tomar en consideración la evolución salarial del cargo que ostentaba la demandante, en términos de la jurisprudencia 3/2022 del Pleno de este Tribunal, de subsecuente inserción:

ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE BAJA CALIFORNIA. SI FUERON SEPARADOS DE SU CARGO Y PRIVADOS DE LOS EMOLUMENTOS CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DECLARADA NULA, LAS SALAS DEBEN CONDENAR A LA AUTORIDAD A CUBRIRLES LAS PRESTACIONES QUE NO DISFRUTARON, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA EVOLUCIÓN SALARIAL DEL CARGO QUE OSTENTABAN. (LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO



ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017).

Hechos: Una Sala declaró la nulidad de la resolución en virtud del cual se encontró responsable a un elemento de seguridad pública por el incumplimiento de un requisito de permanencia. A fin de restituir al actor en su derecho afectado, condenó a la autoridad demandada a pagar la indemnización y demás prestaciones conducentes, tomando en consideración la evolución salarial del cargo. Inconforme con los términos de esa condena, la autoridad interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Si un elemento de seguridad pública fue separado de su cargo y privado de los emolumentos con motivo de una resolución declarada nula, las Salas deben condenar a la autoridad a cubrirle las prestaciones que no disfrutó, tomando en consideración la evolución salarial del cargo que ostentaba.

Justificación: Para invocar la tutela jurisdiccional, nuestro sistema procesal precisa la existencia de un acto que haya generado una afectación real y concreta en la esfera jurídica del demandante. Por lo cual, su naturaleza no es preventiva sino reparadora, de manera que su finalidad no es propiamente la protección de un derecho o su salvaguarda ante un potencial daño, su finalidad es restituir al actor en el pleno goce del derecho que fue vulnerado con motivo de la actividad administrativa ilegal. En ese tenor, la expresión: "salvaguardar el derecho afectado", prevista en el artículo 84 de la Ley del Tribunal, debe interpretarse en función de su finalidad, lo cual lleva a entender que la sentencia que declare fundada la pretensión del actor, deberá restituirlo en el pleno goce del derecho que fue vulnerado con motivo de la actividad administrativa ilegal; lo cual a su vez implica que deben ponerse las cosas en el estado que se encontraban al momento en que se dictó el acto impugnado, como si éste nunca se hubiere producido. De manera que, si un elemento de seguridad pública fue separado de su cargo y privado de los emolumentos con motivo de una resolución declarada nula, las Salas deben condenar a la autoridad a cubrirle las prestaciones que no disfrutó, tomando en consideración la evolución salarial del cargo que ostentaba, dado que de no haberse emitido esa resolución, hubiera continuado recibiendo íntegros sus ingresos, además de los aumentos correspondientes al modificarse los tabuladores de emolumentos.

Precedentes:

Recurso de Queja 548/2012 S.S.- Promovente: Jonathan Manuel Ledezma López.- Autoridad demandada: Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California.- 19 de junio de 2020.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez.

Recurso de Queja 3423/2016 S.S.- Promovente: Jorge Delgado Ramírez.- Autoridad demandada: Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California.- 19 de junio de 2020.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magistrado Guillermo Moreno Sada.

Recurso de Queja 664/2016 S.S.- Promovente: Fernando Muñiz Crisosto.- Autoridad demandada: Comisión de Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California.- 9 de octubre de 2022.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez.

Por último, se deberá entregar un desglose pormenorizado de los conceptos y cantidades pagadas y de los



descuentos efectuados, en su caso, debiendo girarse los oficios pertinentes a las autoridades correspondientes a efecto de que realicen los trámites legales y administrativos a que haya lugar para el pago ordenado.

Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 107 de la Ley del Tribunal, se...

R E S U E L V E:

PRIMERO.- Es fundado el motivo de inconformidad analizado en el presente fallo, consecuentemente;

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de la resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno por la Comisión del Servicio Profesional en el procedimiento administrativo ***** (2), por la cual se determinó la separación definitiva de la actora como miembro policiaco adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 109 de la Ley del Tribunal se condena a la Comisión del Servicio Profesional en los términos precisados en el Considerando Séptimo de esta sentencia.

Notifíquese por Boletín Jurisdiccional a las partes.

Así lo resolvió la licenciada Leticia Castro Figueroa, Primer Secretaria de Acuerdos de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, quien actúa en funciones de Magistrada por ministerio de ley, según designación hecha mediante acuerdo de Pleno de este órgano jurisdiccional de fecha ocho de marzo de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto por los artículos 12 y 21, fracciones V y XII, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California publicada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno en la sección I del Periódico Oficial del Estado de Baja California y firmó ante la presencia del Secretario de Acuerdos, licenciado Luis Javier González Moreno, quien da fe.

"1.- ELIMINADO: Nombre, en 1 renglón, en fojas 1 y 23. Fundamento legal: artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales."

"2.- ELIMINADO: Número de expediente, en 1 renglón, en fojas 30 y 34. Fundamento legal: artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales."

"3.- ELIMINADO: Domicilio particular, en 1 renglón, en fojas 12 y 13. Fundamento legal: artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales."

LA SUSCRITA LICENCIADA DANIELA ONTIVEROS RAMÍREZ, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, HACE CONSTAR: -----
QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSIÓN PÚBLICA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA LICENCIADA LETICIA CASTRO FIGUEROA, PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, QUIEN EN LA FECHA EN QUE EMITIÓ LA SENTENCIA ACTUÓ EN FUNCIONES DE MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY, SEGÚN DESIGNACIÓN HECHA MEDIANTE ACUERDO DE PLENO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DE FECHA OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12 Y 21, FRACCIONES V Y XII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA PUBLICADA EL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO EN LA SECCIÓN I DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RELATIVA A LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO 172/2021 SE, EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIEZ ASTERSICOS; VERSIÓN PÚBLICA QUE VA EN TREINTA Y CUATRO (34) FOJAS ÚTILES. -----
LO ANTERIOR CON APOYO DE LOS ARTÍCULOS 80, 83, FRACCIÓN VI, INCISO B, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. DOY FE. -----

